

Major plantea privatizar el sistema de pensiones en el Reino Unido

El plan sólo afectaría a los jóvenes que accedan al mercado laboral

INIGO GURRUCHAGA CORRESPONSAL LONDRES

John Major se propone privatizar, de forma gradual, el sistema de pensiones en el Reino Unido en un intento de frenar el imparable crecimiento del gasto de la Seguridad Social. Convencido de que el modelo actual es inviable sin profundas reformas, el primer ministro presentó ayer las líneas básicas del nuevo modelo, que sólo afectaría a los jóvenes que se incorporen al mercado laboral.

El plan, inspirado en uno similar aplicado en Chile, será incorporado por los conservadores a su programa para las próximas elecciones y pretende recuperar la imagen dura de los *tories* en un momento en el que todos los sondeos les son desfavorables. Pese a ello, Major negó cualquier tipo de oportunismo a su iniciativa. Además, admitió que los cambios legislativos necesarios para modificar el actual sistema sólo podrán ser introducidos a finales de la próxima legislatura, que concluirá en el año 2001.

Según el proyecto, los jóvenes que se incorporen al mercado laboral contribuirían obligatoriamente las aportaciones básicas actuales a la Seguridad Social — unas 1.800 pesetas semanales — a un fondo de pensiones de su elección, que lo gestionaría para ofrecerles en el retiro el rendimiento de sus ahorros, o a sus herederos en caso de fallecimiento.

El Gobierno calcula que los desembolsos de una persona con un salario en torno a las 70.000 pese-

tas semanales podría acumular a lo largo de su vida laboral un fondo de unos 26 millones, que le podrían producir una renta de 35.000 pesetas semanales en el momento de su jubilación.

El Ejecutivo sostiene que deben respetarse las condiciones vigentes para los pensionistas actuales y los trabajadores en activo. Además, garantiza que todos los contribuyentes a los fondos privados, una vez modificada la legislación, recibirían la pensión básica si sus fondos no garantizasen ese nivel de renta.

Coste de 1,46 billones

El plan, que Major justifica en la dudosa viabilidad futura del actual sistema de Seguridad Social, agobiado por las deudas, sanciona la desaparición del modelo estatal de contribuciones asociadas a niveles de renta superiores (Serp) introducido en 1978. En la actualidad, 15 millones de empleados prefieren contribuir a sus propios esquemas antes que al Serp, que sólo recibe contribuciones de



John Major.

uno de cada cinco trabajadores. El coste del sistema para el Gobierno — 1,46 billones de pesetas — amenaza con dispararse a los 1,88 billones en el año 2010 y a los 2,7 billones en el 2020.

Aunque la oposición reconoce que la reforma es necesaria, recibió ayer con críticas la propuesta del Gobierno. Los laboristas apuestan por la implantación de un modelo mixto.

Santer y el Gobierno belga unen sus fuerzas contra el despido de trabajadores en Renault

FERNANDO PESCADOR

CORRESPONSAL BRUSELAS

El presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, en una declaración sin precedentes, hizo ayer una defensa de la Europa social y animó a los trabajadores a reclamar sus derechos ante los tribunales contra el cierre de la fábrica Renault en el norte de Bélgica. Santer subrayó que el drama social de Vilvorde, lugar donde se encuentra la planta, «muestra con agudeza que Europa necesita un capítulo social convincente». Incluso, el Rey de Bélgica mostró su preocupación por la situación creada.

La Comisión acusó ayer a Renault de haber incumplido lo dispuesto en sendas directivas sobre despidos colectivos y Consejo Europeo de Trabajadores, a la hora de plantear el cierre de su factoría, con la consiguiente desaparición de 3.100 empleos directos.

Esas normas establecen la obligatoriedad de consultar a los trabajadores «con tiempo suficiente para negociar un acuerdo» cuando se prevean despidos masivos, así como de mantener informado al Consejo Europeo de Trabajadores de medidas empresariales que tengan una incidencia en el conjunto de un grupo industrial.

Tanto Francia como Bélgica han transpuesto a sus respectivos ordenamientos internos las directivas en cuestión, por lo que los trabajadores concernidos, o el propio Estado belga, están facultados para recurrir ante los tribunales nacionales la decisión de Renault.

«Grave ataque»

Santer lamentó ayer la manera en que la empresa francesa ha gestionado el cierre de su planta de ensamblaje en Bélgica. «Constituye un ataque grave al espíritu de confianza sobre el que Europa se sustenta», señaló. «Nuestros empresarios se benefician del Mercado Interior. Pero tiene una contrapartida: para preservar nuestro modelo de sociedad es preciso que todos contribuyan a la confianza, respetando la coherencia esencial entre sus decisiones económicas y el papel social de las empresas».

El Ejecutivo comunitario es, con todo, incompetente para intervenir en esta polémica. Las autoridades belgas han hecho saber ya que ejercerán la acción en justicia. Mientras tanto, la presión política y social sobre Renault aumenta. Ayer se supo que el ministerio belga del Interior se propone anular la adquisición de 150 vehículos de esa marca.

S O C I A L I S T A S V I Z C A I N O S

MAÑANA DÍA 7 YO SÍ TRABAJO

Los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, desde el comerciante al conductor de autobús, desde el trabajador de una empresa al profesor de escuela. Todos, mañana día 7 tenemos en nuestras manos la contestación que se merecen. Hagamos del día 7 una jornada de compromiso cívico, para que todo transcurra con normalidad.

Que los trabajadores acudan a sus puestos de trabajo. Que los sindicatos mayoritarios hagan un llamamiento a la normalidad. Que los empresarios abran sus empresas. Que los medios de comunicación muestren su nítida posición contra los fanáticos y violentos. Que los partidos políticos, nacionalistas y no nacionalistas, nos unamos contra esta falsa huelga general.

Hagamos del día 7 un homenaje a la mayoría silenciosa, la que de verdad quiere la paz y la libertad.

MAÑANA DÍA 7 YO SÍ TRABAJO.

